

Salamanca, Guanajuato, a 22 veintidós de septiembre de 2021 dos mil veintiuno, encontrándose debidamente integrado el expediente **JAM-69/2021**, promovido por **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** por su propio derecho, en los siguientes términos;

RESULTANDO

PRIMERO. Promoción de la demanda. Por escrito presentado ante este Juzgado Administrativo Municipal el 16 dieciséis de julio de 2021 dos mil veintiuno, suscrito por quien se indica en el proemio de la presente resolución, impugnando los siguientes actos administrativos:

- I.** La boleta de infracción con número de folio XXXX, la cual le fue notificada el 20 veinte de marzo de 2021 dos mil veintiuno.
- II.** La calificación de la boleta de infracción, misma que se acredita con la factura original XXXXXXXX con la que se acredita el pago por la cantidad de \$896.00 (ochocientos noventa y seis pesos 00/100) del 30 treinta de julio del 2021 dos mil veintiuno.

Además, solicito a) La declaración de nulidad de dicho acto, b) el reconocimiento del derecho para que se deje sin efecto el folio de infracción, y se devuelva la cantidad que tuvo que erogar por concepto de multa y la cantidad de pensión y arrastre que a su juicio resulta ilegal. c) La condena a la autoridad demandada al pleno restablecimiento de los derechos violentados.

SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante auto de fecha de 29 veintinueve de julio de 2021 dos mil veintiuno, se admitió a

trámite la demanda y se ordenó correr traslado de ella a las, autoridades demandadas, Para que den contestación a la demanda entablada en su contra

Se corrió traslado a la Tesorería municipal, para que de contestación como tercero con un derecho incompatible a la del actor.

Se tuvo por admitidas las pruebas documentales ofrecidas y exhibidas en su escrito inicial de demanda, así como la presuncional legal y humana en todo lo que le favorezca, se le tuvo por señalando autorizados legales y domicilio para recibir notificaciones, además manifestó que no consiente la publicación de sus datos personales.

TERCERO. Contestación de la demanda. Por auto de fecha 07 siete de septiembre de 2021 dos mil veintiuno, se tuvo a las autoridades demandadas por contestando en tiempo y forma la demanda entablada en su contra, proporcionando nombre de autorizados y domicilio procesal para oír y recibir toda clase notificaciones.

Se tuvo a “tesorería Municipal se tuvo por contestando en tiempo y forma.

Finalmente, se señaló fecha y hora para el desahogo de audiencia de alegatos.

CUARTO. Audiencia final del proceso. Legalmente citadas las partes, siendo las 10:00 diez horas con cero minutos del 22 veintidós de septiembre de 2021 dos mil veintiuno, únicamente la parte actora los presento por escrito.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Competencia. Este juzgado Administrativo Municipal con sede en Salamanca, Guanajuato, es competente para conocer y resolver el presente proceso, de conformidad con los artículos 1, fracción II y 263 párrafo primero del Código de Justicia Administrativa de Guanajuato; así como lo previsto por los artículos 241, 243 segundo

párrafo, 244 y 246, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

SEGUNDO. Certeza del acto impugnado. La existencia se tiene por acreditado con la copia simple de la boleta de infracción, con número de folio XXXXX –foja 09-, emitida el 20 veinte de marzo de 2021 dos mil veintiuno adminiculada con la confesión realizada por la autoridad encausada al momento de contestar la demanda en cuanto expreso que era cierto la elaboración de la infracción impugnada.

Esta valoración se fundamenta en los artículos 48 fracción I, 117,118, 123 y 121 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Así como en la tesis jurisprudencial I.3o.C. J/37, que a la letra dice:

Por lo que la objeción de las pruebas documentales que hace valer el tercero en el presente asunto, con fundamento en el artículo 86 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato, no ha lugar pues si bien las documentales hacen prueba plena de su existencia.

En cuanto a la calificación se tiene por acreditada dentro de la de la factura original XXXXXX –foja 10- emitida por la autoridad exactora, en la cual se aprecia el pago de la multa que aparejo el acto refutado.

Comprobante fiscal que por sus características en cuanto a sello oficial, firma, membrete del municipio de Salamanca, Guanajuato, el haber sido expedido por servidores públicos en ejercicio de sus funciones, es un documento público con valor probatorio pleno para acreditar que el ahora actor realizó el pago del acto combatido, lo anterior de conformidad a lo dispuesto por los artículos 78, 117 y 121 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

TERCERO. Las causales de improcedencia y sobreseimiento.

Previamente al estudio del fondo del asunto, procede examinar las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público y, por tanto, de estudio oficioso y preferente.

En esa tesitura se analizará la que hacen valer la autoridad demanda, quienes en síntesis expresan lo siguiente:

“...opongo la excepción de falta de agravio personal y directo en la esfera jurídica del demandante...”

En cuanto a la falta de interés jurídico del actor lo expuesto por las autoridades demandada y el tercero en el proceso resulta infundado atento a las siguientes consideraciones.

Del folio de infracción XXXXX se desprende que el agente vial en el rubro del conductor asentó de manera literal “XXXXXXXXXX” (sic).

Ante tal indeterminación del sujeto al cual se dirige el acto impugnado, no dejo duda de que el hoy actor se le afecto su esfera jurídica.

Entonces, si XXXXXXXXXXXX acude a promover el presente proceso como afectado por la imposición de la boleta de infracción, teniendo es su poder la original de la factura de pago XXXXXXXXXXXX , acreditando su personalidad, pues como se puede observar en fecha

13 trece de julio del 2021 dos mil veintiuno se realizó el pago por la cantidad de \$896.00 (ochocientos noventa y seis pesos 00/100 M.N).

Esta valoración se fundamenta en los artículos 117, 121 y 131 del *Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato*.

Resulta aplicable a lo anterior, la siguiente tesis aislada, que se aplica por analogía y que fue emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y que a la letra establece:

<<INTERES JURIDICO, EL ACTO RECLAMADO DEBE AFECTARLO DIRECTAMENTE. Para que el quejoso pueda pedir amparo contra un acto que estime afecta sus intereses jurídicos, el acto de autoridad debe dirigirse directamente en su contra, o de no ser así debe el cumplimiento en sí afectarle, aunque originalmente el acto no haya sido dirigido en su perjuicio, por lo que si el quejoso no se encuentra en ninguna de las dos hipótesis el amparo es improcedente en términos del artículo 73 fracción V de la ley de la materia.>>

Por otro lado, en cuanto al señalamiento que hace la autoridad respecto de la legalidad de su actuación y su percepción acerca de que por ello este proceso es improcedente, debe señalarse que la materia de controversia en este caso es precisamente la definición de la legalidad del acto combatido, razón por la que no puede traducirse en una causa de improcedencia o de sobreseimiento establecidas en los artículos 261 y 262 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, pues sus consideraciones se refieren a la legalidad del acto impugnado.

Dicho de otro modo, las alegaciones de la autoridad se refieren al estudio de la cuestión de fondo del asunto, razón por la que sus planteamientos no constituyen una de las causas antes señaladas y, por ende, es preciso desestimar su estudio en este apartado.

Por lo anteriormente expuesto y al no actualizarse alguna de las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos

261, en relación con el 262, ambos del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios del Guanajuato, **NO SE SOBREESE EL PRESENTE PROCESO ADMINISTRATIVO.**

CUARTO. Se precisa a las partes que no se transcribirán íntegramente el concepto de impugnación expuesto por el accionante, ni los argumentos esgrimidos por la autoridad demandada. Lo anterior con apoyo en la Jurisprudencia por contradicción de tesis número 2a. /J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a la Novena Época, Tomo XXXI, de mayo de 2010 dos mil diez, consultable a página 830, que es del tenor literal siguiente:

«CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la Litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer».

QUINTO. En el concepto de impugnación donde se señala por la parte actora la competencia de la autoridad demandada cabe a bien señalar la siguiente jurisprudencia por contradicción de tesis número XVI.1º.A.T.J/11, sustentada Por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a la Novena Época, Tomo XXIX, de junio de 2009

dos mil nueve, consultable a página 878, que es del tenor literal siguiente:

<<COMPETENCIA. LA FALTA DE PRONUNCIAMIENTO EXPRESO EN LA SENTENCIA, ES INDICATIVO DE QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONSIDERÓ OFICIOSAMENTE QUE LA AUTORIDAD DEMANDADA ES COMPETENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO VIGENTE A PARTIR DEL UNO DE ENERO DE DOS MIL OCHO).

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, al analizar de oficio la competencia de la autoridad demandada, no se encuentra obligado a realizar un pronunciamiento expreso en la sentencia, cuando considera que la autoridad es competente, pues si bien, de conformidad con el artículo 302, fracción I y último párrafo, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el juzgador podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la falta de competencia de la autoridad para dictar el acto impugnado y la ausencia total de fundamentación o motivación en éste, ello no significa que el órgano jurisdiccional se encuentre facultado discrecionalmente para examinar ese tema cuando lo considere conveniente, pues la connotación sobre la importancia del aspecto de la "competencia" que se reconoce de ese estudio, orientan la conclusión de que el uso que le procuró el legislador al incluir el verbo "podrá", no es para identificar una facultad potestativa, sino una obligación para el resolutor de que siempre y en todos los casos se pondere la competencia de la autoridad que emite el acto o instruye el procedimiento porque es un aspecto que interesa a la comunidad⁶. De ahí que, en el supuesto de que el citado tribunal, al analizar oficiosamente la competencia de la autoridad administrativa considere que es incompetente, su pronunciamiento en ese sentido será indispensable, porque ello constituirá la causa de nulidad de la resolución impugnada; empero, si estima que es competente, no se encuentra obligado a plasmar esa consideración en la sentencia que emita, pues esa falta de pronunciamiento es indicativo de que el juzgador asumió que la autoridad demandada sí tenía competencia para emitir la resolución o acto impugnado en el juicio de nulidad, lo que se corrobora con la circunstancia de que

continuó con el análisis de la procedencia del juicio y en su caso, entró al estudio de fondo de la controversia. >>

Quien resuelve considera **fundado** el **único** concepto de impugnación en donde la parte actora argumenta que el folio de infracción **XXXXX**, se emitió sin contener una debida fundamentación y motivación de conformidad con los siguientes razonamientos jurídico:

A fin de establecer la procedencia del concepto de impugnación, es oportuno fijar el concepto sobre debida motivación y fundamentación de un acto administrativo, lo cual se expone conforme a tesis jurisprudencial VI. 2o. J/248, sostenida por los Tribunales Colegiados de Circuito, contenida en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 64 de abril de 1993, página 43, con registro 216534, que a la letra dice:

<< FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como

correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado.>>

El artículo 137, fracción VI del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipio de Guanajuato, señala como elementos de validez del acto administrativo, la debida fundamentación y motivación.

En ese orden de ideas, tratándose de una boleta de infracción en materia de vialidad, la fundamentación debe traducirse en el señalamiento preciso de los preceptos legales aplicables al caso, mientras que, por motivar, debe entenderse como el señalamiento preciso y detallado de las circunstancias de tiempo, modo y lugar y el razonamiento jurídico donde se explique por qué esos hechos actualizan la hipótesis contenida en el Reglamento de vialidad para el municipio de Salamanca, Guanajuato.

Sirve de sustento al argumento vertido supralíneas, la siguiente Jurisprudencia, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Segunda Parte-2, página 622, Tesis No. VI. 2º. J/31, que a la letra dice:

<<FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. Por fundar se entiende que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso, y por motivar que deberán señalarse, claramente las circunstancias especiales, razones o causas inmediatas que se hayan tenido en cuenta para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las

normas aplicables, es decir que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. >>

En la especie, la autoridad demandada asentó dentro del acto impugnado se limitó a señalar con una “X”, en la parte impresa donde señala lo siguiente: “Circular en sentido contrario o sobre las aceras”.

Lo anterior, si bien es cierto que se cita como fundamento el artículo 38 fracción X del Reglamento de Vialidad para el Municipio de Salamanca, Guanajuato, En el apartado de “Circunstancias de tiempo, modo y lugar que motivan la infracción” señala lo siguiente: “13:30 horas del día 20/03/2021 se observa circular en sentido contrario por la calle Diagonal Emiliano entre Insurgentes y Artes a la motociclista marca Honda turismo color negro con rojo, placas XXXXX, motivo de presente folio de infracción ”(sic) La autoridad demandada, sin embargo; debió describir pormenorizadamente los hechos que acontecieron para determinar que el actor estaba infringiendo el Reglamento de Vialidad del Municipio de Salamanca, Guanajuato, la autoridad se limita en señalar que se encontraba circulando en sentido contrario, sin acreditar cual es el sentido correcto de la calle mencionada. Omitió señalar los hechos pormenorizados de cómo fue que no respeto, para determinar la boleta de infracción. Sin acreditar además demás el procedimiento que se tiene que realizar para la elaboración de infracciones, esto con fundamento en el artículo 15 del Reglamento de Vialidad para el municipio de Salamanca, Guanajuato, que a la letra señala lo siguiente:

“Del procedimiento de infracción

Artículo 15.- En el caso de que los conductores contravengan alguna de las disposiciones de este Reglamento, el personal operativo de la Dirección, deberá proceder en la forma siguiente:

I. Indicar al conductor, en forma clara y evidente, utilizando el silbato, autoparlante manual, o verbalmente que debe interrumpir la

marcha del vehículo y estacionarlo en algún lugar donde no obstaculice el tránsito;

II. Abordará al infractor, mostrando su identificación laboral, y haciéndole saber al conductor la infracción que ha cometido, de conformidad al reglamento vigente;

III. Solicitará respetuosamente al conductor que muestre su licencia de conducir, tarjeta de circulación, y en su caso, carta porte tratándose de vehículos de transporte pesado o con material peligroso; y,

IV. Una vez mostrados los documentos, levantará la boleta de infracción y entregará al infractor el ejemplar o ejemplares que corresponda.

Desde la identificación, hasta el levantamiento del acta de infracción, se deberá proceder sin interrupción.”

Pues de la descripción realizada, no se demuestran de manera detallada los hechos, para que el, agente vial, realizara dicha infracción. Pues no acredita como fue que se identificó ante el hoy actor, como detuvo la marcha del automóvil, si solicito que mostrara sus documentos. Además de no realizar una motivación y fundamentación debida

No señala los hechos específicos por los cuales la demandada se percató de la supuesta acción cometida, pues no se señalaron las causas específicas que dieron origen a tal consideración, esto es, no especifica cómo se percató que el hoy actor se estacionó en el lugar, tampoco plasma las circunstancias particulares en las cuales fue descubierta la misma, de tal modo que no exista dudas en relación a las circunstancias en las que acaecieron los hechos narrados en el folio de infracción por la demandada pues no es suficiente motivación para la elaboración de dicho acto

En efecto, correspondía a la demandada indicar mediante un relato pormenorizado de cómo ocurrieron los hechos, para acreditar en el

texto mismo del acto controvertido, cómo se percató que el hoy actor no respetó el señalamiento.

Lo anterior de conformidad al criterio Jurisprudencial sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, y que es del tenor literal siguiente:

«FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado.». (Octava Época, Registro: 216534, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 64, Abril de 1993, Materia(s): Administrativa, Tesis: VI. 2o. J/248, Página: 43.).

En estos términos, para que la motivación sea suficiente y congruente, es necesario que en el propio cuerpo de la infracción se señalen en forma completa, las razones que sustenten su dicho y de las que pueda acreditarse la comisión de la totalidad de conductas imputadas. Se concluye por ello, que la motivación empleada, resulta insuficiente.

Por todo lo anterior, para efecto de que pudiera subsistir la presunción de legalidad de la que se encuentran investidos los actos administrativos, resulta necesario que la autoridad sujete su actuar a las formalidades contenidas en el artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato; para el presente asunto, particularmente haber motivado en forma suficiente, la totalidad de las circunstancias que acreditaran fehacientemente la comisión de las conductas imputadas.

Así como también, acorde al diverso criterio Jurisprudencial aprobado por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto señalan:

«FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.» (Octava Época, Registro: 219034,

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 54, Junio de 1992, Materia(s): Común, Tesis: V.2o. J/32, Página: 49.).

Lo anterior así se sostiene, pues limitarse a realizar las anotaciones como las que invoco la autoridad, sin una debida fundamentación y motivación, puede dar como resultado que un agente vial arbitrariamente elabore infracciones imponerle la carga de efectuar un pago injustamente habría tenido que soportar, así como imputarle cualquier conducta sin detallar el sustento jurídico en que soporte su decisión.

No es óbice para arribar a esta conclusión el hecho de que la autoridad, al momento de su contestación en lo medular negó que la boleta de infracción XXXX se encontrara indebidamente fundada y motivada; y refiere que existe una contradicción entre lo señalado por el actor y el material probatorio, a su juicio existen elementos tendientes a evidenciar la legalidad de la conducta reprochada y que la negación lisa y llana hecha por el recurrente debe considerarse como calificada.

El argumento sostenido por la autoridad en cuanto a que nos encontramos en presencia de una negación que envuelve una afirmación **es infundado** atento a lo siguiente:

El artículo 47 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, establece que los actos administrativos se presumirán legales, sin embargo, las autoridades administrativas deberán probar los hechos en que los motiven cuando **el interesado los niegue lisa y llanamente**, a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho.

- a) Dentro del escrito de demanda <<foja 6>> capítulo de conceptos de impugnación, el justiciable de una forma clara y sin cortapisas negó lisa y llanamente, por lo que, la presunción de legalidad del acto deja de operar revirtiendo a de esta manera a la demandada la carga de la prueba a fin de demostrar la existencia de los hechos y, por tanto, **la legalidad del acto administrativo**, situación que dentro del presente proceso no se acredita, pues del análisis de la boleta de infracción XXXXX resulta indebidamente fundada y motivada atento a los argumentos antes expuestos en esta resolución.

Es importante señalar que dentro del presente proceso administrativo se ventila sobre la legalidad o ilegalidad del folio de infracción XXXXX, de esta manera, por regla general le corresponde a la autoridad emisora del acto impugnado acreditar que el mismo cumplía con todos los elementos y requisitos de validez regulados por los artículos 137 y 138 Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Bajo ese contexto, la omisión o irregularidad de alguno de los elementos de validez trae como sanción la nulidad del acto administrativo, mismo que no podrá ser remplazado por otro, tampoco subsanarse y por tanto, el impetrante no tiene la obligación de cumplirlo.

En consecuencia, las agravios esgrimidos por el actor resultan fundados referente a la indebida fundamentación y motivación del acto impugnado, en atención a que es en el propio acto donde de forma completa deban señalarse el ordenamiento legal

aplicable y las razones y circunstancias pormenorizadas bajo las cuales se cometió una falta administrativa y no en un documento distinto, lo anterior con fundamento en la fracción VI del artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Como apoyo de lo anterior, se hace propio, el criterio que sostiene la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, contenida en la página 119 ciento diecinueve, de la publicación intitulada “Criterios 2000-2008” del referido Tribunal, la cual es del tenor siguiente:

“INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- PROCEDE DECRETAR LA NULIDAD LISA Y LLANA.- La ausencia de fundamentación y motivación deriva en el decretamiento de una nulidad para el efecto de que se emita otro acto debidamente fundado y motivado. Por su parte la indebida satisfacción de estos extremos, conduce a decretar una nulidad lisa y llana, ya que aquí el particular no requiere conocer los fundamentos y motivos de la afectación, sino que es sabedor de que los aplicados en el acto en concreto no son los adecuados.¹”

En las relatadas circunstancias, es de concluirse que del contenido del acto combatido no se advierten elementos suficientes que demuestren que el hoy actor haya infringido algún ordenamiento legal.

¹(Exp. 4.509/02. Sentencia de fecha 09 nueve de mayo de 2003. Actor: Martha Isabel Espriu Manrique)

Por las consideraciones vertidas, con fundamento en los artículos 143 párrafo primero, 300 fracción II y 302 fracciones II y IV, del multicitado Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, lo procedente decretar la **NULIDAD TOTAL** del acto impugnado consistente en boleta de infracción XXXXX, elaborada por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agente vial, adscrito a la Dirección de Vialidad de Salamanca, Guanajuato.

Asimismo, es procedente decretar la nulidad total de la calificación de boleta anulado, esto por ser producto de un acto viciado de origen y, por ende, no puede subsistir sin aquella que le dio origen.

Esta determinación se sustenta en el artículo 300 fracción II del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como en la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 121-126 sexta parte; pagina 280, Séptima Época, con registro número 252103, que esta establece:

“ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal.” - -

SEXTO. Dentro del escrito inicial de demanda el ahora actor solicito como reconocimiento de derecho lo siguiente:

a) a) el reconocimiento de derecho para que le sea devuelta la cantidad de **\$896.00.00 (ochocientos noventa pesos 00/100 en moneda nacional)**, misma que erogó por concepto de la multa que aparejós el acto impugnado.

a) el derecho para que la autoridad se abstenga de hacer cualquier tipo de registro de carácter negativo o perjudicial, o bien si ya se realizó se proceda a su cancelación dentro del libro de sanciones administrativas del municipio de Salamanca, Guanajuato.

En cuanto al inciso a) el actor acreditó el pago de la multa aportando al sumario ejemplar original consistente en comprobante fiscal con referencia XXXXXXXX de fecha 13 trece de julio de 2021 dos mil veintiuno, documento que se le concede valor probatorio pleno de conformidad a los artículos 78, 117 y 121 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, creando convicción en esta juzgadora respecto a que tal pago corresponden al mismo acto administrativo que ha quedado anulado.

Por lo que respecta a la no inscripción y/o cancelación de los antecedentes administrativos, **ha lugar al reconocimiento** del derecho, en atención a los siguientes argumentos:

Toda actuación policial se asienta en documentos oficiales para su debido registro en las plataformas destinado para ellos, tal y como se desprende del artículo 40, fracción IX de la Ley General del Sistema de Seguridad Publica y lo correlativo al numeral 85 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, que a la letra establecen:

De la ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica.

De las obligaciones y sanciones de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública

<< **Artículo 40.-** Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones:

XIX. Inscribir las detenciones en el Registro Administrativo de Detenciones conforme a las disposiciones aplicables.

De la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato.

Colaboración en materia de registro de antecedentes de tránsito

Artículo 85. Con la finalidad de contar con información oportuna y suficiente para prevenir accidentes de tránsito, así como para detectar a los infractores reincidentes, la Policía Estatal de Caminos, y los municipios, se apoyarán en el registro estatal de antecedentes de tránsito...>>

Por ende, una vez que ha quedado anulada la boleta de infracción y el total de su contenido, SE RECONOCE EL DERECHO DE LA PARTE ACTORA, a que la autoridad demandada se abstenga de realizar o colaborar en la inscripción de antecedentes de tránsito y en el supuesto de haberse inscrito la sanción materia del presente juicio, PROCEDA A SU CANCELACION TODA VEZ QUE HA QUEDADO ANULADA CON MOTIVO DE LA PRESENTE SENTENCIA.

En base a lo antes expuesto, la autoridad deberá informar sobre el cumplimiento otorgado al presente considerando, **en un término de cinco días hábiles** contados a partir de aquél en que cause ejecutoria esta sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 322 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

En esa tesitura y derivado de los argumentos esgrimidos por esta juzgadora, **se condena a la autoridad demandada (agente vial)** a realizar las gestiones necesarias a fin de que realice al actor, la devolución de las cantidades de **\$896.00 (ochocientos noventa y seis pesos 00/100 en moneda nacional)**, que deberán de ser entregadas mediante título nominativo –cheque- en favor del justiciable o en efectivo, lo anterior con la finalidad de no imponer cargas al actor para el cumplimiento de la presente sentencia.

Debiendo adoptar la autoridad demanda todas las medidas que sean necesarias para el pleno restablecimiento del derecho reconocido, pudiendo auxiliarse de otras autoridades para el cabal cumplimiento de esta sentencia.

Encuentra aplicación por analogía al caso concreto, el criterio expedido por el H. Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, del rubro y texto siguientes:

«DEVOLUCIÓN DEL PAGO DE LO INDEBIDO. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD DE LA QUE EMANÓ EL ACTO ANULADO REALIZAR LAS GESTIONES PARA.- Sí el actor ocurrió ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado a efecto de solicitar el reembolso del pago que realizó, por considerar que la infracción del que provino era ilegal, resulta correcto que el A quo condenara a su devolución a la Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado, y no a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, pues el acto de autoridad (imposición y calificación de la infracción), por el cual el actor enteró esa cantidad al erario estatal, fue emitido por el titular de esa Dirección, no así la mencionada Secretaría, la que, en todo caso, se limitó a cumplir con su cometido de recaudar los ingresos estatales, como dispone el artículo 5º del Código Fiscal del Estado, por lo que corresponde a esa Dirección General de Tránsito y Transporte, realizar las gestiones necesarias para que quede sin efectos el pago realizado a la autoridad recaudadora y se devuelva al actor la cantidad cuyo acto de origen

fue declarado ilegal.²

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO. Este Juzgado Administrativo Municipal resulto competente para conocer y resolver el presente proceso administrativo, atento a lo dispuesto por el considerando primero de esta sentencia.

SEGUNDO. No se sobresee el proceso, de acuerdo con lo asentado en el **CONSIDERANDO TERCERO** de este fallo.

TERCERO. Se declara la **NULIDAD TOTAL** de la boleta de infracción **XXXXX**, en los términos de lo manifestado en los **CONSIDERANDO QUINTO**.

CUARTO. Ha lugar al **RECONOCIMIENTO DEL DERECHO** de la parte actora, Y **A LA CONDENA** de las pretensiones declaradas procedentes, en los términos manifestados en el **CONSIDERANDO SEXTO**.

NOTIFÍQUESE A LAS PARTES. -----

En su oportunidad procesal, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido y dese de baja del Libro de Registro de este órgano de control de legalidad.

Así lo resolvió y firma la Licenciada **Estephania Núñez Diosdado**, Juez Administrativo Municipal de Salamanca, Guanajuato, quien actúa asistido en forma legal con Secretaria de Estudio y Cuenta, Licenciada **Lesli Hayde Leticia Valadez Dávalos**, quien da fe. - - - -

² (Toca 136/07. Recurso de Revisión interpuesto por Daniel García Razo, en su carácter de autorizado del Director General de Tránsito y Transporte del Estado. Resolución de fecha 9 de enero de 2008)."